

La desmovilización y el desarme paramilitar en Colombia: Éxito provisional y silencioso ¹

Se estima que el proceso de DDR con los grupos paramilitares ha salvado entre 1400 y 2800 vidas a nivel nacional. Sin embargo, la variación a nivel regional es considerable; en el caso de Nariño, por ejemplo, el DDR ha estado asociado a un aumento en los homicidios. El impacto final del proceso aún no se conoce. La ley de Justicia y Paz, tal y como fue modificada por el fallo reciente de la Corte Constitucional, ofrece un balance razonable entre paz y justicia. El proceso de DDR merece un respaldo decidido de la comunidad internacional.

Por Michael Spagat

Departamento de Economía
Royal Holloway, University of London
y CERAC

Los grupos paramilitares ilegales de derecha son centrales para entender la inseguridad que han enfrentado los civiles en Colombia. Estos grupos han sido responsables de la mayoría de las muertes civiles en el conflicto. En comparación con las guerrillas y las fuerzas del gobierno, los paramilitares exhiben una razón de muertos a heridos excepcionalmente alta en los eventos de conflicto en los que han participado, lo que indica una gran intencionalidad en su actuar. En otras palabras, han ejecutado un gran número de personas a corta distancia, principalmente en masacres, hiriendo a pocos en esa carnicería. Esas muertes fueron parte de una estrategia explícita de terror que consistía en matar a los civiles sobre los que los paramilitares tenían sospecha de ayudar a los grupos guerrilleros. Como resultado del cese al fuego que la mayor parte de estos grupos han seguido desde finales de 2002, y de su posterior desmovilización y desarme, los paramilitares han reducido significativamente, pero no han cesado por completo, de asesinar.

No obstante el proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) los paramilitares continúan siendo una amenaza a la seguridad humana. Durante su fase de auge, entre 1998 y 2002, los paramilitares se convirtieron en uno de los grupos armados no estatales más grandes y mejor armados del mundo: saturados con fusiles de asalto AR-15 y ametralladoras M60 hechos en los EE.UU., fusiles Galil, y variedad de silenciadores para pistolas y fusiles. Los paramilitares también acumularon munición de manera abundante, lo cual es consistente con su pobre disciplina de fuego en el campo de batalla. Durante el último año estos grupos han reducido sustancialmente su arsenal, entregando, a través del proceso de DDR, casi 17.000 armas de alta calidad (a menudo nuevas), pero casi con seguridad se puede afirmar que retienen un buen inventario. Por ahora, se puede seguir suponiendo que existe un grupo no despreciable de paramilitares desmovilizados armados o que podrían armarse en el muy corto plazo.

¹ Este artículo resume un amplio programa de investigación en curso sobre la violencia en Colombia el cual se lleva a cabo en CERAC en Colombia. Me baso en *Desmovilización de las AUC: ¿mayor seguridad humana?* Escrito por Andrea González Peña y Jorge Alberto Restrepo. Óscar Becerra de CERAC también hace parte de este trabajo. Agradecemos a los gobiernos canadiense y suizo por su apoyo a través del Small Arms Survey de Ginebra.

En vista del rol clave que los paramilitares han jugado en el pasado violento de Colombia, es claro que el éxito del proceso de DDR es vital para el futuro del país. Si la gran mayoría de los paramilitares transitan hacia una pacífica existencia civil, Colombia puede alcanzar una reducción sustancial y duradera de la violencia. Si por el contrario, algunos se dedican al crimen y el narcotráfico y/o continúan luchando contra las guerrillas y sus presuntos partidarios, Colombia seguirá siendo un lugar muy violento por años.

Las siguientes dos gráficas muestran el vasto rango de lo que puede ser el posible futuro para Colombia. La gráfica 1 cubre una zona coherente de operación paramilitar que los investigadores de CERAC hemos designado “Antioquia y Medellín”, dado que incluye el Valle de Aburrá –donde está localizada el Área Metropolitana de esta ciudad- así como una amplia zona de influencia paramilitar cerca de este valle que hace parte del Departamento de Antioquia². La curva negra muestra la tasa anual de homicidios en la zona, calculada cada mes. La curva azul, que se incluye para efectos comparativos, muestra la tasa anual de homicidios, calculada cada mes, para un conjunto de municipios a lo largo del país, que, de acuerdo con CERAC, no ha tenido actividad paramilitar en años recientes. La curva punteada, cuya escala está en el eje derecho, muestra la relación entre las dos primeras curvas. Esta razón muestra qué tan alta es la violencia en aquellas regiones con presencia paramilitar activa y aquellas que no la tienen. Finalmente, las líneas verticales marcan fechas clave, incluyendo las desmovilizaciones de tres grupos paramilitares que operaban en la zona. La tasa de homicidios en la zona de Antioquia y Medellín cae dramáticamente desde un pico que coincide casi exactamente con el inicio del primer gobierno de Uribe Vélez. La curva negra comienza bien por encima de la azul y después cae por debajo de ésta en 2005, justo después de la desmovilización del Frente Suroeste Antioqueño. La razón de las dos curvas cae en picada inmediatamente después de la desmovilización del grupo Cacique Nutibara, a finales de 2003. Para resumir, la tasa de homicidios disminuye particularmente rápido en esta zona de Antioquia y Medellín en comparación con los municipios donde no ha habido presencia paramilitar y el momento de la caída sugiere que el proceso de DDR paramilitar es uno de los factores causales de esta mejora³.

La gráfica 2, construida tal como la gráfica 1, cubre la región designada por CERAC como Nariño, pero cuenta una historia mucho más pesimista. Nariño no sólo no ha seguido la positiva tendencia del homicidio a nivel nacional y de la zona no-paramilitar. Por el contrario, la tasa de homicidios de Nariño saltó inmediatamente después de la desmovilización del frente “Libertadores del Sur”. Reportes recientes dan cuenta de la emergencia del grupo paramilitar “Nueva Generación” en Nariño alimentan la sospecha de que el DDR en esta región ha tomado un rumbo indeseado.

Afortunadamente, la mayoría de zonas paramilitares han seguido más de cerca la tendencia de la primera gráfica que la de la segunda. Investigadores del CERAC han analizado el impacto del proceso de DDR paramilitar recurriendo a técnicas estadísticas que sacan provecho del hecho que diferentes grupos, operando en diferentes áreas, se desmovilizan en diferentes momentos. Esto no es más que una comparación sofisticada

² El artículo *Desmovilización de las AUC: ¿Mayor seguridad humana?* Contiene un mapa de la clasificación de las zonas con presencia paramilitar de acuerdo con CERAC.

³ Otros factores que posiblemente hayan contribuido a la disminución de la tasa de homicidios en Colombia incluyen el aumento en la presencia de instituciones de justicia, militares y de policía así como una variedad de iniciativas de desarme.

que busca establecer los cambios en las tasas de homicidio en las áreas de operación de cada grupo, justo después de que éstos se desmovilizan. El proceso de DDR toma así el carácter de un experimento controlado, dada la gran variación en los tiempos y los lugares de desmovilización. Un resultado principal de este trabajo es que la desmovilización promedio- de las que ha habido 37 hasta el momento- reduce de (manera significativa en términos estadísticos) la tasa de homicidio en un 13% en el área de operación del grupo desmovilizado. Un cálculo adicional indica que dado el efecto acumulativo de todas las desmovilizaciones a la fecha, se han prevenido entre 1400 y 2800 homicidios desde que estas se iniciaron. Así, el DDR paramilitar le ha significado un gran dividendo a Colombia.

Dos advertencias deberían temperar nuestro entusiasmo por el temprano éxito del DDR. Primero, los resultados varían considerablemente según la región. Nariño es la única zona donde CERAC encuentra un aumento estadísticamente significativo en los homicidios debido al DDR, pero hay resultados que no son concluyentes en varias regiones. La segunda advertencia es que el proceso de DDR es aún muy reciente y está en continua evolución.

El recibimiento internacional que ha tenido el proceso ha progresado en los últimos meses de helado a, máximo, tibio. Detrás de esta reacción hay problemas de percepción pero en gran medida el gobierno ha fomentado esta indiferencia. En efecto, es difícil establecer un marco operativo para llevar a buen término un proceso de DDR: se trata esencialmente de lograr transigir entre hacer justicia a crímenes pasados y un futuro más pacífico. Primero, porque uno no puede saber qué tanta justicia se puede lograr sin destruir acuerdos con grupos armados que no han sido derrotados en el campo de batalla. Segundo, porque el DDR genera sentimientos acendrados y porque la fuerte oposición de una minoría resonante puede ser muy costosa, haciendo que un amplio consenso sea preferible a una mayoría de, digamos, un 60% de la opinión. El gobierno Uribe, aparentemente seducido por el apoyo popular y del Congreso, parece haber subestimado estas consideraciones. En varias ocasiones, por ejemplo, el presidente Uribe se ha referido de manera lacerante en contra de quienes son críticos del proceso, interpretando sugerencias constructivas como apoyo a la guerrilla. Esto le ha costado oro a Colombia en círculos internacionales y ha amargado la oposición doméstica, aún cuando no parece haber afectado en nada el apoyo doméstico a Uribe.

El más serio error táctico del gobierno Uribe ocurrió durante la discusión de la Ley de Justicia y Paz (LJP) que rige el DDR paramilitar. Colombia tiene una larga historia de procesos de DDR, consistentes con las prácticas internacionales de la época, que otorgaron impunidad total a grupos guerrilleros de izquierda, recolectaron pocas armas y no resultaron en reparación alguna a las víctimas. La LJP, tal y como fue modificada en mayo pasado por la Corte Constitucional, hace el DDR paramilitar mucho más orientado a hacer justicia que los precedentes nacionales e internacionales. Sin embargo, la preocupación por las limitaciones en materia de hacer justicia hizo de esta ley un pasivo para Colombia. El primer plan de desmovilización del gobierno fue descartado, casi universalmente, por ser demasiado suave con los paramilitares. Uribe introdujo algunos cambios pero después le hizo un desaire a la iniciativa liderada por el Senador Rafael Pardo y dos representantes que buscaba introducir nuevas modificaciones al proyecto. Esta iniciativa tenía un apoyo extraordinariamente amplio a través del espectro político colombiano e incluso contaba con el apoyo de *Human Rights Watch*. En cambio, el gobierno impulsó su propio proyecto sin un consenso amplio y así perdió

en el camino mucho apoyo internacional. La Corte Constitucional forzó la LJP hacia lo propuesto por Pardo; una movida poco sorpresiva dada la historia de activismo de la Corte. Gran parte del daño internacional causado por el trámite de la LJP es irreversible. Si el gobierno Uribe hubiera juzgado con más cuidado los vientos políticos podría hoy reclamar como suyo un consenso amplio alrededor de esta ley, al tiempo que estaría gozando de los beneficios de un mayor apoyo internacional al proceso.

A pesar de estos problemas y las advertencias referidas, debemos reconocer que muchas de las críticas al proceso de DDR han sido erradas. Una crítica particularmente espuria es la relacionada con una supuesta baja proporción de armas entregadas en relación con el número de personas desmovilizadas. Por un lado, esta proporción es en efecto alta comparada con otros procesos de DDR tanto en Colombia como internacionalmente.⁴ Más aún, la alta calidad de las armas recolectadas en este proceso no tiene precedentes en una escala internacional. Deberíamos más bien preocuparnos por lo que no ha sido entregado, ya que estas armas decomisadas pueden ser nada más la punta de un iceberg; pero podemos estar seguros de que la entrega de armas ha sido, ciertamente, seria. Segundo, la proporción de armas entregadas a desmovilizados no es, por sí sola, un buen indicador del éxito de un proceso de DDR. Esta proporción, por ejemplo, está muy débilmente relacionada con la evolución de la tasa de homicidio; a pesar de la dramática diferencia en la dinámica del homicidio, tanto en Nariño como en Antioquia y Medellín se presentó una alta razón de armas entregadas a personas desmovilizadas durante el proceso.

El proceso de DDR comenzó con el pie derecho y ahora cuenta con una base legal que merece un amplio apoyo internacional. La batalla por un exitoso proceso de DDR con los grupos paramilitares hasta ahora comienza y aún es demasiado temprano para cantar victoria. Es vital monitorear los desarrollos zona por zona para así poder responder de manera pronta a tendencias negativas. Ha llegado el momento para que la comunidad internacional se comprometa de forma seria con este proceso esperanzador.

⁴ *Desmovilización de las AUC: ¿mayor seguridad humana?* ofrece más detalles.